

Venezuela

www.360geopolitica.org

El 28 de enero de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos la estrategia de la administración Trump para Venezuela. Expuso un plan de tres fases que Estados Unidos pretende implementar tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Rubio describió el marco como una hoja de ruta para gestionar la transición política y económica de Venezuela desde un régimen autoritario hacia un sistema más estable y democrático.

Rubio explicó que la primera fase, la *estabilización*, tiene como objetivo evitar que Venezuela “descienda al caos” tras la captura de Maduro. Esta fase hace hincapié en asegurar y administrar la infraestructura crítica del país, en particular el sector petrolero, e implementar una estrategia denominada de “cuarentena”. Esto incluye la incautación y venta de petróleo sancionado, destinando los ingresos a servicios públicos esenciales en lugar de a la corrupción.

La segunda fase, la *recuperación*, se centra en reactivar la economía venezolana mediante la reapertura del acceso para que empresas estadounidenses, occidentales y otras internacionales participen en la industria petrolera y en los mercados en general. Las medidas de reconciliación política y social también son centrales en esta fase, incluida la amnistía para los presos políticos y el retorno de los exiliados, con el objetivo de fortalecer la sociedad civil y reconstruir las instituciones.

Por último, la tercera fase, la *transición*, está diseñada para guiar a Venezuela hacia un cambio político de largo plazo, con el objetivo final de lograr procesos democráticos libres y justos y reformas de gobernanza. Rubio señaló que esta transición podría extenderse durante varios años y que aspectos de la estabilización, la recuperación y la transición podrían superponerse según las condiciones dentro del país.

Contexto

El régimen de Maduro se ha mantenido en el poder mediante la fuerza y el fraude, tras tres elecciones disputadas en las últimas dos décadas. Durante este período, Venezuela ha documentado aproximadamente 36.800 víctimas de tortura y violencia política, más de 18.500 presos políticos y más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales.

Casi 10 millones de venezolanos han sido forzados al exilio en todo el mundo, creando una de las mayores crisis de refugiados de la historia moderna. Dentro del país, la represión ha sido implacable: 468 personas han muerto durante protestas, más de 400 medios de

comunicación independientes han sido censurados o cerrados, y se estima que el 90 % de la población ha sido empujada a la pobreza.

A pesar de haber perdido al menos tres elecciones nacionales que nunca fueron reconocidas internacionalmente, el régimen se ha aferrado al poder mientras presuntamente desviaba un estimado de 2,5 billones de dólares desde el ascenso de Hugo Chávez. Se cree que estos fondos financiaron operaciones de influencia política, redes de cabildeo y partidos aliados en toda Sudamérica –como Colombia Humana, que ayudó a llevar a Gustavo Petro al poder– así como en España, incluidos el Partido Socialista y Podemos, y más allá. Los críticos sostienen que esta estrategia exportó efectivamente influencia autoritaria incluso mientras Venezuela colapsaba¹.

En marzo de 2025, Maduro y el presidente colombiano Petro –a menudo descritos por críticos como políticamente inseparables debido a su estrecha alineación– lanzaron una campaña coordinada y agresiva contra la administración Trump. Este esfuerzo habría contado con el apoyo de redes de cabildeo afines al Partido Demócrata en Estados Unidos. Al mismo tiempo, grupos criminales organizados –incluidos el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y otros actores armados ilegales que operan en Colombia y Venezuela– habrían ampliado su poder y alcance territorial. Mientras tanto, bajo el liderazgo de Petro, Colombia en 2025 se convirtió en el mayor productor mundial de cocaína por tercer año consecutivo.

El régimen de Maduro también ha convertido a Venezuela en una plataforma clave para el narcotráfico, contribuyendo de manera significativa al mercado global de cocaína. A través de redes protegidas por el Estado, el control de rutas aéreas y marítimas, y alianzas con organizaciones criminales transnacionales, el narcotráfico se ha convertido en una fuente estructural de financiamiento del régimen. Esta economía criminal ha socavado las instituciones tanto en Venezuela como en Colombia y ha alimentado la violencia, la corrupción y la inestabilidad en la región y más allá.

Múltiples informes sugieren que Petro ha reflejado cada vez más el estilo de liderazgo de Maduro, impulsando una estrategia compartida de desafío institucional, provocación internacional e influencia transnacional, impulsada en gran medida por economías criminales y prácticas autoritarias incrustadas en el núcleo de su poder político.

En octubre de 2025, durante la Asamblea General de la ONU, Petro supuestamente abandonó los procedimientos oficiales para unirse a protestas callejeras en Nueva York contra el presidente Trump.

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=xq5TDv3NL7w>

Observadores sostienen que parecía apostar por la movilización internacional –y posiblemente incluso por el arresto– para elevarse como mártir político.

En respuesta a las acciones de Estados Unidos, incluido un importante despliegue militar en el sur del Caribe en septiembre de 2025, Maduro y Petro emitieron declaraciones desafiantes retando a Estados Unidos a intervenir. Este despliegue estadounidense, descrito públicamente como operaciones antidrogas, incluyó buques de guerra navales, unidades de marines, aeronaves, activos de vigilancia y fuerzas de apoyo.

Las autoridades venezolanas interpretaron el despliegue como un posible precursor de un cambio de régimen y posteriormente confirmaron que durante la campaña se produjeron ataques estadounidenses mortales contra embarcaciones. A pesar de estas tensiones elevadas, grandes cantidades de cocaína habrían continuado fluyendo por rutas del Caribe y el Pacífico, presuntamente coordinadas con grupos como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC.

Contexto de Colombia

Colombia es descrita cada vez más por críticos como controlada de facto por grupos armados ilegales y redes de crimen organizado, muchos de los cuales fueron incorporados a la política de “Paz Total” de Petro. Estos grupos dominan el comercio de cocaína, la explotación ilegal de recursos naturales, la trata de personas y grandes segmentos del mercado del oro. Los opositores sostienen que han sido utilizados para intimidar o silenciar a figuras de la oposición, jueces, periodistas, mujeres y líderes de la sociedad civil, lo que marcaría –según algunos– la primera vez en la historia de Colombia que redes criminales han sido empoderadas abiertamente por un gobierno en funciones.

Contexto de Venezuela

Tras la operación militar estadounidense que capturó a Maduro, millones de venezolanos habrían expresado alivio y una renovada esperanza de un futuro libre de autoritarismo. Se observaron celebraciones en la diáspora venezolana en Estados Unidos y en partes de Sudamérica. Aunque algunos residentes de Caracas expresaron preocupación por la seguridad civil y la inestabilidad, muchos manifestaron gratitud por la intervención estadounidense, estableciendo paralelismos con reacciones públicas observadas en otras crisis, como Ucrania o Irán.

En Colombia, el debate político se intensificó cuando críticos pidieron la destitución de Petro, alegando que había fortalecido redes criminales para consolidar el poder y preservar su influencia a través del senador Iván Cepeda, a quien describen como su posible proxy político para las elecciones presidenciales de mayo de 2026.

Contexto internacional

El 4 de enero de 2026, el senador Iván Cepeda viajó a España para defender públicamente la legitimidad del régimen de Maduro. Su visita incluyó discursos denunciando la intervención extranjera y planteó interrogantes sobre si elementos dentro del gobierno español facilitaron informalmente la delegación. Las fuentes oficiales de financiación del viaje de Cepeda siguen sin revelarse, lo que alimenta especulaciones sobre apoyos tras bambalinas.

Mientras tanto, circularon ampliamente en línea declaraciones públicas atribuidas a figuras como Ben Saul, relator especial de la ONU sobre derechos humanos, y Fabrizio Hochschild, asesor del secretario general de la ONU, que se referían a la legitimidad continuada de Maduro como *“el líder del pueblo venezolano”*. Estas afirmaciones intensificaron el debate sobre la postura de las Naciones Unidas frente al régimen venezolano.

Estas señales diplomáticas surgieron en medio de tensiones más amplias entre Estados Unidos y las Naciones Unidas. Algunos analistas sostienen que el secretario general enfrenta una presión creciente por parte de la actual administración estadounidense respecto a la estructura, autoridad y relevancia de la ONU. Los críticos argumentan que cualquier defensa percibida de Maduro contradice directamente el mandato central de la ONU: la protección de los derechos humanos, la gobernanza democrática y la resolución pacífica de conflictos.

De manera más amplia, el historial del secretario general ha sido objeto de críticas crecientes por una inacción sostenida. Los ucranianos han visto poco liderazgo efectivo durante casi cuatro años; los venezolanos, a lo largo de todo su mandato; y los iraníes, colombianos y otros han enfrentado una ausencia institucional similar. En lugar de ejercer liderazgo moral y político en el escenario global, el secretario general es retratado cada vez más como desconectado, delegando la diplomacia al personal y reduciendo el compromiso internacional a declaraciones virtuales en lugar de acciones decisivas.

Mientras tanto, las elecciones legislativas de Colombia en marzo y las elecciones presidenciales en mayo están seriamente amenazadas. Los grupos armados ilegales y el crimen organizado ejercen ahora control sobre más de la mitad de los municipios del país –casi el 70 % del territorio colombiano– socavando gravemente la competencia política libre y justa.

En este clima de miedo, solo el candidato de Petro puede hacer campaña con libertad. Otros candidatos enfrentan amenazas creíbles de violencia o muerte, como lo ilustra el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio de 2025.

Bogotá, Colombia, 4 de febrero de 2026.